

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PENAL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

Pereira, primero (1º) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 3:50 p.m.
Aprobado por Acta No. 1119

Radicación:	666823104001 2016 00178 01
Accionante:	José Wilson Rodríguez García
Accionado:	Fondo Nacional del Ahorro
Procedencia:	Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal
Decisión:	Confirma improcedencia

ASUNTO

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el señor **JOSÉ WILSON RODRÍGUEZ GARCÍA**, accionante dentro del presente asunto, contra el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 21 de octubre de 2016, mediante el cual negó por improcedente la acción de tutela instaurada por él en contra del Fondo Nacional del Ahorro, – de ahora en adelante FNA-.

ANTECEDENTES:

El señor José Wilson interpuso acción de tutela en contra del FNA, toda vez que considera vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y mínimo vital, lo cual fundamentó en los

hechos que se relacionan a continuación:

- Estuvo vinculado laboralmente con la administración municipal de Santa Rosa de Cabal hasta el 31 de diciembre del año 2013.
- Como se encontraba amparado con una póliza de seguro de desempleo por crédito hipotecario del FNA, en el mes de enero del año 2014 presentó ante el mencionado Fondo la respectiva solicitud de dicho seguro, con todos los documentos que exige la ley para la obtención del mismo, y el 21 de febrero les remitió un oficio contentivo de la declaración bajo juramento de no encontrarse trabajando.
- El 21 de abril de ese mismo año recibió oficio de la Aseguradora QBE donde se le informaba su calidad de cotizante dependiente, por lo que ese mismo día envió correo electrónico mediante el cual solicitó que le informaran qué documentos requería para demostrar su calidad de desempleado y cotizante.
- En mayo de 2014 recibió un oficio en el que se le informó sobre la objeción de la compañía de seguros por su calidad de cotizante, el cual fue reiterado en el mes de junio, y posteriormente le solicitaron aclarar la situación desde febrero hasta ese mes, pero esto ya lo había hecho desde la comunicación que les envió el 7 de agosto (sic).
- En el mes de agosto solicitó nuevamente dar trámite a la reclamación de seguro de desempleo, para ello anexó certificación de la EPS, comprobante de salud y declaración juramentada.
- En octubre remitió de nuevo la certificación de la EPS que informaba su calidad de cotizante, comprobante de pago en salud, declaración juramentada y certificación de la Corporación ACISS, solicitando que le dieran trámite a su petición, pero recibió nuevamente oficio donde le insistían que debía

demostrar pagos a la fecha, y así mismo ocurrió en noviembre y diciembre.

- En diciembre se comunicó telefónicamente con las oficinas del FNA, y le informó a la funcionaria que le contestó todo lo que había ocurrido con su solicitud, al respecto sólo le sugirió enviar nuevamente toda la documentación, lo que hizo de manera inmediata.
- En febrero de 2015 le negaron nuevamente su solicitud por no anexar la documentación requerida, lo cual no es cierto porque en repetidas oportunidades lo hizo.
- En diciembre del mismo año 2015 presentó mediante apoderado judicial un derecho de petición en la sede en Bogotá del FNA, en esa oportunidad se explicó detalladamente el manejo que se le había dado a sus solicitudes. La entidad contestó a través del Jefe de División Administrativa, nuevamente negando sus pretensiones, argumentando que no cumplió con aportar oportunamente la información requerida y operó el fenómeno de la prescripción, sin tener en cuenta todos los argumentos que expuso y la desidia de los funcionarios que lo atendieron durante todo ese tiempo.
- El FNA dilató su petición al punto de declarar la prescripción exigiéndole documentos que ya había aportado.
- Dicha prescripción no se dio, pues sus constantes peticiones escritas y verbales la interrumpieron.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Admisión:

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal avocó el conocimiento de la actuación el día 6 de octubre del presente año, y ordenó la notificación y traslado de la demanda al FNA.

2. Respuesta de las accionadas:

Fondo Nacional del Ahorro: lo manifestado por esa entidad se puede sustraer de la siguiente forma:

La reclamación sobre el seguro de desempleo fue solicitada por el señor José Wilson el 7 de febrero de 2014, de ésta se corrió traslado a la compañía de seguros.

Su solicitud fue aceptada inicialmente y se le alcanzó a pagar una de las cuotas, sin embargo, éstas se suspendieron pues la aseguradora objetó el pago de las cuotas faltantes, al encontrar que el señor José Wilson figuraba como cotizante dependiente de salud en los reportes del Fosyga, y por esta razón, no se configuraba el amparo básico de la póliza pues su objeto es amparar la situación de desempleo del afiliado.

El en agosto de 2014 el afiliado solicitó la reactivación del seguro, en esa oportunidad anexó una certificación de Coomeva de EPS donde se revela su calidad de cotizante cabeza de familia del régimen contributivo, sin embargo, no deja claridad sobre la calidad en la que cotiza, es decir, como dependiente o independiente, y tampoco se discriminan los pagos realizados ni la razón social del aportante. Por lo tanto se le informó la documentación que debía remitir para iniciar el trámite ante la compañía de seguros.

En diferentes oportunidades el accionante reiteró su solicitud de reactivación, pero esa entidad siempre le contestó que no estaba aportando los documentos suficientes que se requieren para ese fin.

En febrero y marzo de 2015 se dio respuesta a la queja interpuesta por el afiliado y ya en diciembre de ese mismo año se recibió derecho de petición del apoderado judicial del accionante al que se le dio respuesta en enero del presente año, indicándole que al señor José Wilson se le informó en varias oportunidades la documentación que debía aportar para solicitar la reconsideración de la compañía

de seguros.

Finalmente señaló que ha transcurrido un periodo superior a dos años a partir de la fecha de ocurrencia del siniestro por lo que la reclamación se encuentra prescrita desde el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 1081 del Código de Comercio, extinguiéndose a partir de ese momento todo derecho a reclamar ante la compañía de seguros.

Puntualizó además que no es esa la entidad la responsable de los pagos de seguros sino que compete estudiarlos a la compañía de seguros QBE seguros.

3. Decisión:

Una vez el Juzgado de Conocimiento estudió la situación fáctica planteada, decidió mediante sentencia del 21 de octubre de 2016 negar las pretensiones de la acción de tutela al considerar que la misma es improcedente porque a pesar de haber realizado varias solicitudes, el accionante no aportó la documentación requerida para ser beneficiario del seguro de desempleo, además el FNA ha cumplido con su obligación constitucional dando respuesta a los derechos de petición en varias ocasiones, lo que a su parecer es una razón suficiente para no realizar un estudio de fondo.

4. Impugnación

El 27 de octubre del año en curso, el señor José Wilson presentó memorial por medio del cual impugnó la decisión de primera instancia, pues considera que no se ajusta a los hechos que motivaron la interposición de la tutela, se funda en consideraciones inexactas e incurre en error de derecho al tomar una decisión insignificante para sus pretensiones, por otra parte la prescripción no se originó porque estuvo interrumpida por sus solicitudes, discute que envió toda la documentación necesaria y obligatoria y demostró su calidad de cotizante en Coomeva, además la Juez sólo

tuvo en cuenta lo informado por el FNA pero no lo que él expuso vulnerando su debido proceso, por último dijo que al pagar mensualmente el seguro de desempleo y que éste no sea reconocido por el fondo nacional del ahorro afecta su mínimo vital.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia:

Esta Sala de decisión se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.

2. Problema jurídico:

En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si se han vulnerado los derechos fundamentales de petición, debido proceso y mínimo vital del accionante por parte del Fondo Nacional del Ahorro ante la negativa de darle trámite a sus reiteradas solicitudes de concesión del seguro de desempleo que considera tiene derecho.

3. Solución:

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para su protección.

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, toda persona tiene derecho a recurrir a la acción de

tutela para invocar ante los jueces en cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de una autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley.

No obstante, para poder acceder a ella se deben cumplir una serie de requisitos llamados de procedibilidad que deben ser verificados por el Juez constitucional para establecer la procedencia o no de la tutela invocada.

En ese orden, es necesario anotar que el Decreto 2591 de 1991, estableció las causales específicas de improcedencia de la tutela, indicando que ella no procede cuando se presenta una de las siguientes hipótesis:

- *Existencia de otro medio de defensa judicial.*
- *Existencia del Habeas Corpus*
- *Protección de derechos colectivos*
- *Casos de daño consumado*
- *Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto.*
- *A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez, tutela contra sentencias de tutela y la tutela temeraria.*

Sobre la inmediatez:

El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza de los derechos, sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando éste no se presenta de manera concomitante con la vulneración o amenaza de los mismos, debe ser interpuesta en un

tiempo razonable desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresión.

Sobre este asunto ha definido la Corte Constitucional que *"la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado"*¹.

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar. Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte Constitucional así:

*"... el constituyente asume que la acción de tutela configura un mecanismo urgente de protección y lo regula como tal. De allí que choque con esa índole establecida por el constituyente, el proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la vulneración de sus derechos. Quien así procede, no puede pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios años".*²

Del caso concreto:

En el presente asunto se tiene que no es posible realizar un análisis de fondo, ya que revisado el cumplimiento de los requisitos generales de la tutela, encuentra la Corporación que aquí no se cumple con el de la inmediatez, teniendo en cuenta que lo que pretende discutir en esta oportunidad el accionante está relacionado

¹ Sentencia SU-961 de 1999.

² Sentencia T- 730 de 2003.

con una serie de solicitudes ante el FNA encaminadas al pago de un seguro de desempleo al que considera tiene derecho, sin embargo éstas peticiones datan del año 2014 hasta el mes de marzo de 2015, y a partir de ese momento dejó transcurrir casi 9 meses para presentar una petición por intermedio de apoderado judicial en el mes de diciembre, de la cual obtuvo respuesta en enero del presente año y sólo hasta ahora interpone la presente acción de tutela, esto quiere decir que ha dejado transcurrir alrededor de 19 meses en los cuales no se vislumbra actividad efectiva por su parte para tratar de que sea conjurado el daño que según él se le ha causado a su derecho al debido proceso, situación que desvirtúa por completo el principio en mención.

Como anotación final, debe resaltarse que en caso de haber tomado otro curso la presente decisión, el resultado hubiera sido el de decretar una nulidad, toda vez que la apoderada del FNA que dio respuesta a la acción de tutela manifestó claramente que la entidad encargada de dar trámite a la solicitud del seguro que reclamaba el accionante era directamente la aseguradora, que en este caso es QBE Seguros, por lo tanto lo correcto hubiera sido proceder a vincular a la mencionada entidad para que efectuara el pronunciamiento correspondiente sobre el asunto.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 21 de octubre de 2016, por medio del cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa negó la tutela de los derechos invocados por el señor **JOSÉ WILSON RODRÍGUEZ GARCÍA**, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria